

Probidad y transparencia: consideraciones sobre el caso chileno

*Por Tomás Villarroel Heinrich**
Investigador Fundación P!ensa

Introducción

La crisis de credibilidad y de confianza que afecta al gobierno como en general a la clase política decantó la última semana en una doble repercusión. Por un lado, en la entrega del Consejo Asesor Presidencial de las propuestas orientadas a una profunda censura en la relación ética-política-negocios.¹ Por el otro, en el tardío reconocimiento del Ejecutivo de que el caso Caval ameritaba una reacción diferente a aquella que minimizaba tanto el tráfico de influencia como el uso de información privilegiada en función de una explicación que evocaba sentimientos filiales, pero que no mostraba ni un reconocimiento ni un camino político. Esto es lo que se le pide al jefe de estado -y es además lo propio de la investidura que ostenta-: que responda con la altura del estadista. La respuesta llegó tarde, pero llegó. Los límites a la reelección, las medidas para regular el gasto de campaña y su financiamiento, la reforma al sistema de Alta Dirección Pública, la regulación de conflictos de interés, el fin a la llamada “puerta giratoria”, el acceso a la información son, entre otras, todas medidas que apuntan en la dirección correcta y que urgía implementar.

Con todo, y más allá del desafortunado anuncio de un proceso constituyente durante una cadena nacional dedicada a la probidad y transparencia, aún quedan flancos abiertos. Por una parte, las explicaciones que tiene que dar aún, entre otros, el jefe del equipo político de gobierno respecto a las asesorías que prestó a una empresa vinculada a campañas políticas. Hasta ahora guarda riguroso silencio. Con todo, si bien lo anterior no es irrelevante y debe ser aclarado, es un caso puntual. Llama la atención por otra parte -esto parece más significativo- que no se haya propuesto legislar sobre la institucionalidad del Servicio de Impuestos Internos para transformarlo una entidad autónoma, así como lo son el Banco Central y la Contraloría General de la República. El SII, es decir, el organismo que recauda los impuestos de los chilenos para financiar el gasto fiscal, no puede ser una prebenda para premiar a algún colaborador o lobbysta partidista según algún criterio de cuoteo en detrimento de la cualificación para ejercicio el cargo. Lo anterior toda vez que el comportamiento del actual director del SII, retrasando -cual operador político partidista- la investigación en el caso SQM, es más que cuestionable.

* Licenciado en Historia de la Universidad Adolfo Ibáñez. Magister en Historia de la Universidad de Chile. Doctor en Historia de la Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Investigador de la Fundación P!ensa.

¹ Véase <http://consejoanticorruptcion.cl>

Chile, ¿país corrupto?

Una vez entregadas las propuestas por la Comisión Engel sólo queda esperar que la discusión legislativa sea rápida y que las mociones que atacan la médula del problema -no todas lo hacen, pero sí la gran mayoría- se conviertan en ley. De lo anterior debería resultar -eso esperan no pocos analistas políticos- una constelación virtuosa tanto de instituciones como de actores políticos y empresariales. Con todo es importante señalar, como sostiene el Contralor General saliente, Ramiro Mendoza, que las recetas legislativas no son mágicas. Los problemas de corrupción y de relaciones indebidas entre negocios y política no aparecieron con el caso Penta y con el destape de los que le siguieron. Es preciso recordar que los casos relevantes -MOP-Gate, Publicam, Coimas etc.- se arrastran desde fines de los años 90 y que en su momento se acodaron tanto salidas políticas, como ajustes legislativos. El destape constante de casos de corrupción en los últimos 20 años sugiere la pregunta, por tanto, si acaso Chile es un país corrupto. Una mirada desde y hacia afuera parece proveer buenos elementos de juicio.

Chile en el vecindario

Partamos por una mirada desde afuera. Algunos analistas extranjeros si bien coinciden en que se trata de un problema grave que afecta tanto la institucionalidad chilena como la imagen-país hacen hincapié en que Chile no es un país corrupto y en que una vez implementados los cambios necesarios el país saldrá de la crisis y volverá a los niveles de reconocimiento internacional que tenía antes.² Si analizamos otro indicador como el nivel de soborno diario a Carabineros, a funcionarios públicos en reparticiones relevantes y a jueces, entre otros, constatamos que estas instituciones son, en líneas generales, muy sólidas y probas. Aquí la diferencia con otros países de América Latina, algunos países vecinos, es abismal. El secreto a voces de que en otros países de América del Sur un funcionario policial, de aduanas etc. es corruptible a cambio de un billete y que la "transacción" es cotidiana, encuentra su correlato en los índices de transparencia de Transparency International. De acuerdo con el último índice de Transparency (2014) países como Bolivia, Argentina y Ecuador ocupan los lugares 103, 107 y 110 respectivamente. Esto contrasta con la posición 21 que ocupaba Chile junto con Uruguay hasta 2014. Ni hablar de Venezuela, que se ubica en el fondo de la tabla junto con Angola, Guinea-Bissau, Haití y el Yemen en el puesto 161.³ El ranking de transparencia ciertamente es un índice de percepciones y no mide valores absolutos, pero así y todo refleja tendencias, y no puede ser desechado a priori. Chile sin duda caerá en el índice correspondiente al año 2015. Es previsible, sin embargo, que no será una caída al vacío y que seguirá liderando el ranking de transparencia regional junto con Uruguay. Con todo, la situación general de Chile no debe dar pie al triunfalismo. En los últimos años se han destapado casos de Carabineros o funcionarios de Investigaciones vinculados a asociaciones delictuales, incluso a redes de narcotráfico. No

² Véase El País, 2.5.2015, The Economist 18.4.2015.

³ <http://www.transparency.org/cpi2014/results> [Consulta: 2.5.2015]

obstante, es necesaria una distinción aquí: en el caso de la emisión de boletas falsas para el financiamiento de campañas políticas así como en el caso del uso y abuso de información privilegiada así como del tráfico de influencias -caso Caval- se trata de los más altos representantes de la República. Y como si eso fuera poco, se ha constatado en los últimos días una cierta institucionalización de ese tipo de prácticas en los más altos niveles, dado que “todos lo hacen”. Es conocido que la peor cizaña para un país son gobernantes corruptos. Es cierto, en tanto, que en el caso de Carabineros se trata de actos delictivos graves, incluso gravísimos. No se observa, sin embargo, una conducta institucionalizada, sino más bien transgresiones individuales.

La indignación ciudadana es en este sentido un capital no menospreciable: también si se mira a otros países de Latinoamérica donde la sociedad civil apenas levanta la voz o en no pocas partes se ha resignado. Una excepción es Brasil donde el caso Petrobras ha calado hondo en la ciudadanía. El gobierno de Dilma Rouseff se encuentra contra las cuerdas y ha sido castigado con un magro 12% de aprobación. Una ciudadanía empoderada y crítica es imprescindible para el buen funcionamiento de una democracia, pero no basta con eso: plantea al mismo tiempo un desafío de primer orden al gobierno de turno y exige una conducción política decidida. El ejecutivo en Chile -y en otras partes- debe asumir las consecuencias, limpiar la casa por dentro -aunque duela- y mostrar un camino político. Porque el sentimiento popular de que toda la clase política está enlodada por igual por la corrupción puede llevar rápidamente a un “sentimiento antipolítico”. Y es ahí donde se le abren las puertas al caudillo populista, quien promete terminar con la mediación de instituciones supuestamente rancias y corroidas para terminar él mismo siendo el mediador, el mesías, que terminará -en contacto directo con el “pueblo”- con los males que aquejan a la sociedad. Ya lo vivió Chile en 1952 cuando Carlos Ibáñez del Campo -el “general de la Esperanza”- llegó al poder con la “escoba” para barrer con la corrupción. Que no quepan dudas: no hay comparación entre el chileno y los caudillos que se han perpetuado en el poder en Venezuela, Bolivia, y Ecuador, pero sí es innegable que el gobierno de Ibáñez del Campo tuvo visos populistas.⁴ Afortunadamente no se salió del cauce institucional democrático, pero a veces estuvo cerca y lo podría haber hecho.

Un modelo: Nueva Zelandia

Chile destaca en el vecindario, porque los demás países en la región, salvo la excepción de Uruguay, son muy débiles. Y como ya se señaló, en virtud de las enmiendas propuestas, Chile no debería caer al vacío en el índice de corrupción internacional. Si dirigimos la mirada ahora hacia afuera y observamos la parte alta de la tabla nos encontramos con que en los tres primeros lugares se ubican Dinamarca, Nueva Zelandia y Finlandia. El caso de Nueva Zelandia es llamativo, pues tiene algunas similitudes con Chile: es un país pequeño, se ubica en latitudes similares en el fin del mundo y en el mismo océano, y algunos sectores económicos relevantes (exportación

⁴ Véase Correa, Sofía/Figueroa, Consuelo/Jocelyn-Holt, Alfredo/Rolle, Claudio/Vicuña, g Manuel, *Historia del siglo XX chileno. Balance paradójica*, Santiago de Chile 2001, p. 200.

agropecuaria y turismo) son similares a los de Chile. Las diferencias son, al mismo tiempo, inmensas: Nueva Zelanda es un país desarrollado con un alto ingreso per cápita, tiene uno de los mejores sistemas educacionales del mundo y lidera el ranking de transparencia mundial. ¿Qué ha hecho el país del rugby y del koala para llegar a este sitio? El sitio alemán “politik-digital” apunta a dos factores. Por una parte, a una política de información abierta y transparente del gobierno hacia sus ciudadanos por medio de una plataforma electrónica de gobierno. El llamado “eGovernment” neozelandés pone a disposición de sus ciudadanos un sinnúmero de documentos e informaciones para explicar sus objetivos y procesos de la manera más transparente posible (www.e-government.govt.nz). Por otra parte destaca la meta desafiada y ambiciosa del gobierno de las islas de convertirse una de las naciones líderes del eGovernment a nivel mundial. La misma autoexigencia se ha convertido en parte del éxito. El gobierno ha sido exitoso en la propagación y en la proyección de la idea de que el estado neozelandés es transparente y probado.⁵ Los hechos corroboran que la iniciativa gubernamental no es una mera campaña efectista vacía de contenido.

Tres propuestas

Con miras al desarrollo institucional, político, socio-económico, pero también urbano que ha logrado el país con características similares a Chile recién mencionado, cabe la siguiente observación: la iniciativa que propuso la comisión Engel de una mayor transparencia también a nivel de municipios es loable y va por buen camino. Sin embargo, parece insuficiente. Un breve recorrido por Valparaíso muestra, a modo de ejemplo, que se han aprobado construcciones de edificios nuevos en zonas de protección patrimonial, arruinando no sólo el sector aledaño directo, sino todo el barrio. Las propuestas del Consejo Anticorrupción atacan bien la figura del alcalde y del director de Obras Municipales, pero deberían ser más severas para con los concejales. Una vía para garantizar que la armonía urbanística y arquitectónica de barrios patrimoniales y zonas aledañas no sean azotadas por la irrupción de altos adefesios de concreto sería sujetar la autorización toda clase de construcción en estas zonas, así como en las de amortiguación, a la supervisión y aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales.

Una segunda propuesta apunta a una implementación más decidida de la noción de eGovernment, es decir, de transparencia y de información a la sociedad civil a través de medios electrónicos. Y que esta política de transparencia en la información (glasnost) no sólo aplique al gobierno central, sino que baje al nivel de gobierno regional, provincial y comunal. La corrupción también prolifera y se expande desde abajo, y es esperable que ex-autoridades comunales involucradas en casos de corrupción, malversación de fondos o irregularidades no puedan, una vez destituidos o cuestionados, acceder - como premio - a cargos de representación parlamentaria.

⁵ <http://politik-digital.de/egovernmentinternationalneuseeland-shtml> [Consulta: 2.5.2015]

Una polis sin ciudadanos virtuosos, por último, está condenada a la mediocridad -ya lo dijeron Platón y Aristóteles- y ahí donde prolifera la corrupción -así lo demuestran diversos estudios- se perpetúa la pobreza. Sin menospreciar el rol que le cabe a la familia en la formación de ciudadanos virtuosos, urge reforzar la educación cívica en el sistema educacional. Una educación cívica meramente reducida a las libertades y derechos individuales o reivindicaciones sociales -como se ha insistido en los últimos años-, pero que menosprecia una visión del conjunto de la sociedad con los deberes y responsabilidades implicados en ella hace un flaco favor: del reduccionismo individualista propagado difícilmente pueden resultar la virtud cívica y la probidad que tanto se evocan hoy. Es necesario reforzar la educación de los valores republicanos que contribuyen a la cohesión social.